

El poder como arma: cómo Maduro y Petro explotan a los civiles

Por Fernando Mora¹

Resumen

En esta explosiva investigación, el autor revela la oscura alianza entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro: una relación forjada hace décadas que ha evolucionado de camaradería ideológica a un auténtico imperio criminal transnacional.

Bajo consignas como “Paz” y “Revolución”, ambos regímenes han usado el poder del Estado para co-gobernar con carteles de droga, armar a grupos ilegales y usar a los civiles como escudos humanos. Desde pactos manipulados hasta campañas antidrogas ficticias, Petro y Maduro han construido una maquinaria política sostenida por el narcotráfico, la propaganda y la represión.

Peor aún: han manipulado la percepción internacional, vendiendo la ilusión de reformas mientras miles de civiles —especialmente mujeres y niños— son reclutados por la fuerza, aterrorizados y sacrificados en nombre del “progreso”.

Esto no es solo corrupción política. Es el secuestro criminal de la democracia. Y no es solo una crisis nacional —es una bomba de tiempo regional. El silencio debe terminar. El mundo tiene que reaccionar.

El dictador Nicolás Maduro de Venezuela y el presidente autoritario de Colombia, Gustavo Petro, han sido aliados políticos desde 1994— cuando Petro invitó por primera vez a Hugo Chávez a Colombia.

Desde entonces, el vínculo ideológico y operativo entre la izquierda [radical] venezolana y colombiana ha evolucionado hasta convertirse en una asociación criminal transnacional, profundamente arraigada en el narcotráfico, la insurgencia armada y la manipulación de las instituciones democráticas.

No es un secreto que el dinero de las FARC y el ELN —obtenido mediante el tráfico de cocaína, el secuestro y el contrabando de armas— fue clave en el ascenso de Chávez al poder. Desde entonces, tanto Chávez como Maduro han reconocido públicamente haber financiado las aspiraciones políticas de Petro.

Hoy, bajo el disfraz de “revolución” y “Paz Total”, ambos regímenes son indistinguibles de redes del crimen organizado.

Una campaña construida sobre el crimen

Durante la campaña presidencial de Petro en 2022, el ya infame Pacto de la Picota expuso los oscuros cimientos

de su ascenso político. El hijo mayor de Petro y un asesor cercano de la campaña —posteriormente nombrado Comisionado de Paz— ingresaron a la cárcel La Picota en Bogotá para negociar con narcotraficantes y capos criminales. Esto no fue un proceso de paz; fue un pacto con el bajo mundo.

Ese pacto fue simbólicamente reafirmado el 4 de septiembre de 2025, cuando la Primera Dama Verónica Alcocer regresó a la cárcel La Picota —un gesto silencioso pero revelador que selló las alianzas criminales de la campaña. Estas acciones confirmaron lo que muchos temían: el gobierno de Petro no está simplemente comprometido— está entrelazado con una criminalidad sistémica.

Poder criminal disfrazado

Bajo Maduro y Petro, los grupos armados ilegales han expandido su influencia de forma exponencial. En Venezuela, co-gobiernan con el régimen bajo la bandera bolivariana. En Colombia, la llamada iniciativa de Paz Total ha legitimado a estos grupos como actores políticos —otorgándoles control territorial y permitiéndoles operar con casi total impunidad.

Los resultados son asombrosos: Colombia es hoy el principal productor y exportador mundial de cocaína, por tercer año consecutivo. Esto no es un fracaso de política pública —es el resultado directo de una estrategia criminal disfrazada de construcción de paz.

Mientras tanto, ambos regímenes reciclan propaganda coordinada —repetida en reuniones de gabinete, alocuciones nacionales, medios estatales y foros internacionales como la Asamblea General de la ONU.

Su narrativa es clara: los civiles, especialmente las poblaciones pobres y rurales, deben “resistir la injerencia extranjera” defendiendo a sus gobiernos. En la práctica, esto significa tomar las armas —o ser usados como escudos humanos.

Civiles como peones de guerra

En ambos países, los grupos armados se incrustan en la población civil. Reclutan menores por la fuerza, aterrorizan comunidades y coaccionan a los más vulnerables para participar en operaciones que violan el derecho internacional.

En Colombia, esta táctica se ha vuelto rutinaria: civiles, a menudo mujeres y niños, son movilizados para bloquear operaciones policiales y militares, proteger a narcotraficantes y obstruir la justicia.

Esto no es resistencia —es guerra psicológica y criminal. Estos grupos están explotando el lenguaje de los

derechos humanos y la justicia social para proteger sus operaciones, mientras cometen crímenes de guerra: tortura, secuestro, reclutamiento infantil y ejecuciones extrajudiciales.

Según el derecho internacional, estas acciones violan los Convenios de Ginebra— específicamente, el Artículo Común 3 y el Protocolo II. Los gobiernos que permiten o ignoran estas prácticas corren el riesgo de ser procesados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La administración Petro, por su silencio y complicidad, encaja cada vez más en esa descripción.

Una paz fabricada, una narrativa fabricada

Las cifras que Petro y Maduro presentan ante la comunidad internacional—sobre incautación de cocaína, desmantelamiento criminal o procesos de paz —están grotescamente infladas o son directamente falsas.

Solo el 0.001% de la producción real de cocaína es incautada por sus autoridades. Esta ilusión de cumplimiento es una táctica clásica del manual del cartel: permitir incautaciones simbólicas para apaciguar a los observadores internacionales mientras se protege la verdadera escala de las operaciones.

Bajo Petro, este engaño se ha institucionalizado. Desde los informes presupuestarios hasta los discursos públicos, las auditorías independientes revelan un patrón constante: la mayoría de los datos de Petro están manipulados, si no completamente fabricados. Lo que comenzó en Venezuela bajo Chávez ahora se ha vuelto rutinario en Colombia bajo Petro.

La paramilitarización de la sociedad civil

Hoy, el 75% del territorio colombiano está dominado por grupos criminales que actúan como estados paralelos. Respaldados por el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas y personas, imponen sus propias leyes, realizan juicios extrajudiciales y gobiernan mediante el miedo.

Solo en 2025, se documentaron 58 levantamientos civiles —en departamentos como Nariño, Guaviare, Cauca, Putumayo y Huila— usados para proteger a narcotraficantes de su captura. Supuestos civiles, a menudo vestidos de blanco para simular neutralidad, formaron muros humanos para bloquear operaciones

militares y policiales. En algunos casos, soldados capturados fueron torturados, quemados vivos o ejecutados —antes de ser liberados en negociaciones mediadas por el CICR.

Este cambio no es accidental. Entre 2018 y 2022, el ejército rara vez se encontraba con civiles durante combates con grupos ilegales. Pero eso cambió cuando los aliados de Petro, operando desde Caracas con el apoyo de Maduro, lanzaron una campaña de mensajes coordinados. Su eslogan —“Nos están matando”— se propagó globalmente durante el Estallido Social de 2021, presentando falsamente las operaciones de seguridad como ataques a civiles inocentes. Esa mentira ha hecho metástasis.

Hoy, protege a criminales armados que usan civiles como escudo —y las mismas organizaciones internacionales que antes denunciaban la violencia ahora guardan silencio.

Una amenaza regional, no solo una crisis nacional.

Lo que estamos presenciando no es simplemente una decadencia política—es el desmantelamiento deliberado de la democracia y el ascenso de estados criminales. Petro y Maduro han instrumentalizado la paz, explotado a los pobres, manipulado la percepción pública legitimando imperios criminales.

¿El resultado? El Estado ha perdido su monopolio de la fuerza. Los grupos criminales tienen más armas, más territorio y más financiación que nunca. Las instituciones democráticas se están derrumbando desde dentro.

Mientras tanto, Petro y Maduro gastan millones en lobistas y agencias de relaciones públicas para mantener la ilusión de reforma. Su objetivo no es la paz —es el poder. Y están dispuestos a sacrificar civiles para conservarlo.

Esta es una línea roja —no solo para Colombia y Venezuela, sino para toda la región. Si la comunidad internacional sigue ignorando esta realidad, corre el riesgo de legitimar un modelo de gobernanza basado en el crimen, el miedo y la represión. El tiempo del silencio ha terminado.

Bogotá, Colombia Febrero / September 23, 2025.